RAWSON, 26 de noviembre de 2014.-

------ **VISTOS:** ----------

------ Estos autos caratulados: "**M., R. A. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa" (Expte. Nº 22.571 -M- 2012)**.----------

------ **DE LOS QUE RESULTA:** ----------

------ 1.- Que vienen estos autos a consideración de esta Sala del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, en virtud del Recurso presentado por los apoderados de los actores -un grupo de policías que revistan en distintas jerarquías- contra la Sentencia Definitiva Nº 27/SCA/14 dictada por este Cuerpo a fs. 246/322 y vta..----------

------ Oportunamente dedujeron en esta sede una acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, persiguiendo una sentencia que condenase a su empleadora a pagarles diferencias salariales. Generadas éstas -entendían- por el incumplimiento de dos normas que establecen mecanismos de liquidación de haberes y que de aplicarse, producirían además su incremento hacia el futuro. Denunciaban una conducta ilícita en la liquidación de haberes por incumplimiento de estos dos preceptos: los artículos 148, segundo párrafo y art. 151, primer párrafo, in fine del Decreto Ley Nº 1561, cuyos textos respectivamente reprodujo el Digesto Jurídico como artículos 147, segundo párrafo y 149, primer párrafo, in fine de la Ley XIX Nº 8. ----------

------ La pretensión alcanzaba la revocación por causa de nulidad o ilegitimidad de todo acto administrativo en el que se haya decidido la no aplicación de dicha normativa, y en hacer cesar la ilegal omisión en la liquidación y pago de los haberes, conforme a derecho.----------

------ Además, requirieron se declarase la inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley Nº 5415, ordenándose a la demandada restablecer el sistema de liquidación normado en el art. 149 del Decreto Ley Nº 1561. A resultas, reclamaban el pago de las diferencias salariales desde que cada suma es debida y con retroactividad a los períodos no prescriptos. Aunque en autos, tal como aclaró el fallo, sólo tres de los accionantes pertenecían al escalafón servicios. Finalmente, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley V N° 66 al considerar que fija un límite salarial a su pretensión.----------

------ La accionada, por su parte, solicitó en el responde su rechazo, en el entendimiento que los preceptos invocados estaban derogados desde hacía muchos años, y no se habían sancionado nuevamente pese a estar publicados en el Digesto Jurídico, motivo por el cual no los aplicó al liquidar salarios. ///También argumentó en defensa de la constitucionalidad del art. 3 de la Ley N° 5415 al considerar infundado su achaque.----------

------ El fallo -en tres votos- rechazó la acción.----------

------ El primer votante efectuó un análisis pormenorizado del plexo normativo, arribando a la conclusión que los dos artículos en los que se sustenta la

pretensión de diferencias salariales estaban derogados cuando se publicaron en el Digesto Jurídico Provincial. Ahondó en las ventajas y desventajas de esta última técnica empleada y acerca de la tarea encargada a una comisión de expertos, que consistía en un ordenamiento y recopilación de las normas provinciales, a fin de depurar las vigentes. Entendió que atento que esa comisión no estaba facultada para sancionar nuevas leyes y aquellos preceptos hacía muchos años que se encontraban derogados, que aparecieran publicados en aquel Cuerpo en el articulado de dicha Ley XIX Nº 8 constituían dos errores lamentables.----------

------ Respecto de la pretendida inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley N° 5415, señaló que el desarrollo argumental de los actores era harto limitado para justificar su pedido y que la defensa de la norma en crisis realizada por la demandada tampoco era contundente. Estableció que el Estado provincial tomó la decisión de abandonar el mecanismo de liquidación de sueldos para el personal policial, a partir del mes de octubre de 2005, incrementando en montos diferentes los haberes básicos de las idénticas jerarquías para las Agrupaciones Comando y Servicios. Reseñó la legislación aplicable y las reiteradas modificaciones exhibidas en la política salarial diseñada para ese régimen. Luego, recordó que, tratándose de una relación de empleo público, se encuentra caracterizada por funciones y atribuciones específicas asignadas a los agentes. Razón por la cual -explicó- no importa una “discriminación arbitraria” como se agravian los accionantes, cuando existe causa justificada para abonar distinta remuneración a quienes no realizan tareas similares. Y concluyó que no se demostró ni fue probado en el juicio la correspondencia entre las “tareas” remuneradas a ambos grupos o la “igualdad de circunstancias” entre esos. Aseveró que ya el régimen policial -Dto. Ley N° 1561- ponderó las diferencias objetivas para separar los agrupamientos que lo integran, distinguiendo sus derechos y obligaciones, con anterioridad al art. 3° que se cuestiona. Para concluir que el trato desigual está justificado, en la conformación de dos grupos a los cuales se asignan distintas tareas y se retribuye en forma diferente.----------

------ El segundo y el tercer votante, sustentándose ambos en el análisis del sistema jurídico realizado por el primero, efectuaron un tratamiento de los mismos tópicos, coincidiendo en que sendos artículos habían sido derogados. Se explayaron en el tipo de derogación de cada precepto: expresa y tácita, en su variante derogación orgánica, respaldándose en doctrina y jurisprudencia. Enfatizaron el efecto de la derogación acaecida, que no volvieron a sancionarse nuevas leyes en el sentido pretendido por los actores y que tampoco cabía interpretar que así fuera en el Digesto Jurídico, porque la comisión que lo elaboró no estaba habilitada para esa tarea. Concluyeron que no se trata de dos nuevos preceptos -en los que se apoyan las diferencias salariales-, sino de dos errores en la publicación de la ley de la policía en esta recopilación, que no fueron advertidos oportunamente y con consecuencias muy graves. Así se indujo a litigar a los actores, que confiaron en la tarea que el Estado Provincial ///encomendó a una comisión que debía ordenar las leyes provinciales vigentes. En ese entendimiento, se impusieron las costas a la demandada. Se le reprochó al Estado Provincial que no hubiera remitido el caso a otra comisión, conformada especialmente para revisar y corregir los errores de dicha recopilación normativa, pese a que expresamente argumentó en la contestación de demanda que consistía en un error de interpretación considerar los dos

artículos vigentes, cuando hacía muchos años que no se los aplicaba por estar derogados. ----------

------ En orden a la achacada inconstitucionalidad, el Dr. Pasutti, desestimó por inexacto el agravio de los actores relativo a la vulneración de su derecho de propiedad -art. 17° de la Constitución Nacional- afirmando que su “haber básico” se había mantenido “congelado”. Acerca de la alegada afectación de la igualdad ante la ley policial “en materia de remuneraciones”, coincidiendo con el primer Votante, sostuvo que no se configuraba la identidad de condiciones laborales invocada por los actores. Definió el “estado policial” para señalar que la sujeción a ese régimen jurídico especial implicaba la aceptación voluntaria de las normas que fijan la dinámica de dicho estado. Recordó que el control de constitucionalidad no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador provincial cuando decidió derogar el sistema del art. 149° del Dto. Ley N° 1561, a través del artículo 3 de la Ley N° 5415, sino solo su razonabilidad. Con jurisprudencia de la Sala y del Alto Tribunal Nacional estableció el alcance de la “igualdad de trato ante la ley” y consideró con ella que, en materia de remuneraciones, yerran los actores al interpretarla. También al afirmar que su génesis fue la modificación del mecanismo de liquidación de sus remuneraciones. Finiquitó que, conforme el criterio expuesto, no se verifica el desajuste entre el precepto atacado y la manda de los arts. 16 y 14 bis de la Constitución Nacional.----------

------ A su turno, el Dr. Rebagliati Russell, sustentándose en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en los arts. 27, 20, 26 y 25 del régimen policial, justificó que surgen evidentes las diferencias objetivas en las funciones y deberes de ambas agrupaciones de dicho escalafón. Concluyó que no existe un trato de indebido disfavor entre los agentes de cada una de esas. Desestimó la invocada violación de la garantía de igual remuneración por igual tarea, expresando que no se acreditó en autos que la norma en crisis haya conculcado los derechos invocados.----------

------- 2.- A fs. 328/348 y vta. impetraron los recurrentes, contra aquella sentencia definitiva, su Recurso Extraordinario Federal para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fundado en el art. 14 de la Ley Nacional N° 48, en concordancia con los arts. 256 y 257 del CPCCN y precedido por la carátula exigida por ese Alto Tribunal.----------

------ En el capítulo “III- PROCEDENCIA FORMAL Y SUSTANCIAL DEL REF” arguyen que la recurrida, por la que se rechazó su demanda contencioso ///administrativa, es una sentencia definitiva de un tribunal en instancia única, y la encuentran arbitraria. Citan fallos de la Corte Nacional.----------

------ En el punto “5- Introducción de la Cuestión Federal”, aseguran haber introducido “la cuestión de inconstitucionalidad” en la demanda, en el acápite XI, cuando se manifestó que ante el supuesto de que no se hiciera lugar a la demanda, se conculcarían los derechos de los actores a una retribución justa e igual remuneración por igual tarea, igualdad y propiedad -detalla-, garantizados en los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional. Añaden para este recurso que así es, en la medida que las liquidaciones salariales no se ajustaron a la ley, ni al bloque de constitucionalidad vigentes ni a los planteos de inconstitucionalidad intentados.----------

------ En el acápite “6- Relación directa de la Cuestión Federal con el caso” aseveran que esta última existe, atento que el apartarse del derecho vigente para liquidar los haberes, da lugar a las diferencias salariales que reclamaron y a la petición de declaración de inconstitucionalidad para quienes pertenecen al escalafón servicios. Dicen que ello tiene conexión con el derecho a una retribución justa, amparado por el art. 14 bis y con la observancia del derecho vigente. Estiman que éste es el que figura en el Digesto Jurídico del Chubut como arts. 147 y 149 de la Ley XIX Nº 8, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del 2 de enero de 2009.----------

------ Encuadran en un supuesto de arbitrariedad por apartamiento de la sentencia dictada del derecho vigente. Arguyen que el fallo en crisis, al afirmar la derogación de normas en vigor y en las que fundaron los actores sus derechos, exhibe un fundamento aparente, expresado con excesivo rigor formal y se aparta de la ley vigente, en perjuicio de garantías operativas que la Constitución Nacional reconoce a todos los trabajadores en los arts. 14 bis, 75 incs. 22 y 23, como es la retribución justa.----------

------ Adunan jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Primero, referida a la verdad jurídica objetiva como exigencia del art. 18 de esa Carta Magna. Otra, a supuestos de “manifiesta... irrazonabilidad de la argumentación”… en el que el razonamiento expone una solución “contraria a las reglas de la lógica y de la experiencia”, que habilitan la vía intentada. Entienden que ello permitirá “la debida preservación de los principios básicos” constitucionales receptados en dicho art. 18 y en el art. 33, que resguardan el derecho a una retribución justa, en base al de igual remuneración por igual tarea, “en los términos de la equiparación salarial con la Policía Federal”. Finalmente citan otros precedentes y doctrina relativa a la arbitrariedad que denuncian, a la “privación de justicia” y a la “garantía de doble instancia” contenida en Pactos Internacionales.----------

------ En el punto “7- El gravamen real, concreto y actual que ocasiona a los recurrentes la sentencia en crisis”, aquél lo encuentran en que ésta no ha sido fundada “en el derecho vigente” y en que disminuye ilegítimamente sus retribuciones, las cuales estiman que debieron percibir conforme a la equiparación de los sueldos de la Policía Federal reconocida -dice- en los arts. 147 último párrafo y 149 primer párrafo de la Ley XIX Nº 8 del Digesto Jurídico vigente. Añaden que el agravio económico que aquélla provoca se configura por las diferencias salariales rechazadas.----------

///--- Reseñan, en el apartado IV, los antecedentes de la causa (fs. 333/341).----

------ Y, en el capítulo “V- Fundamentos del recurso extraordinario federal por sentencia arbitraria” primero reiteran lo expuesto en el acápite 6, antes reseñado. Luego señalan que no se ha interpretado adecuada y razonablemente el Decreto Ley Nº 1700 en el fallo en crisis, dado que el art. 69 dispuso derogar toda otra norma legal que estableciera regímenes de remuneraciones para los sectores del personal dependiente de la Administración Pública Provincial “pero, omite, aunque reconoce que no hay una mención explícita al respecto, tener en cuenta que dicho decreto no ha derogado específicamente los arts. 148 y 151 del Decreto Ley Nº 1561/77” -aseguran.----------

------ Critican la interpretación del Decreto Ley Nº 1700 expresando varios argumentos contradictorios y novedosos, a fin de arribar a su propia interpretación del régimen policial, circunscripta a negar que el art. 69 de dicho decreto haya derogado el “sistema de enganche” de aquel art. 148.----------

------ Sin embargo coinciden los recurrentes con los tres votos del fallo que impugnan en que “el art. 69° de ese mismo texto legal… dispuso la derogación de toda otra norma legal que establezca regímenes de remuneraciones para el personal dependiente de la Administración Pública Provincial o Municipal”. Admite también que en ese Decreto se estableció un régimen de remuneración para el personal de seguridad y así lo describe: “le estableció una suma fija consignada en el Anexo XI de ese instrumento, a lo que se adunaban adicionales y suplementos comprendidos en el Capítulo III de la Ley 1561/77”**.**----------

------ Plantean a la par dos cuestiones novedosas -lo son, atento que no han sido presentadas antes para que se analizaran en el fallo en crisis-, con el ostensible objetivo de que no se aplique el art. 69 de dicho Decreto Ley N° 1700.----------

------ Por un lado, arguyen que como éste fue dictado bajo el régimen de un gobierno de facto, para su validez debía refrendarse, atento que se dictó “ad referéndum del Ministerio del Interior”. Dudan que esto se haya cumplido, manifestando que “no existe constancia”.----------

------ Por otro, confusamente piden aplicar el art. 68 de dicho Decreto Ley Nº 1700, argumentando que en éste se autorizó al Poder Ejecutivo a modificar las remuneraciones que se establecían -a través del mismo- como consecuencia de la política salarial que dispusiera el Gobierno Nacional. Para los recurrentes debe entenderse que ésta “no es otra que el enganche salarial en un 88% del nivel de remuneraciones”. De esto deducen -sin explicar cómo arriban a esta conclusión- que “mal se puede aplicar desde entonces, a la Policía Provincial, el Anexo que contiene el Capítulo X... y Anexo XI, que resulta *in peius* del personal policial...”. ----------

///--- Inteligen que en oportunidad de “confeccionar los textos del Digesto Jurídico, los académicos de la UBA” no interpretaron que dicho art. 69 del Decreto ley Nº 1700 derogase el sistema de enganche de aquel art. 148, porque aquel no contiene ningún porcentaje o coeficiente remunerativo alcanzado o modificado por tal decreto, sino que se garantizó o aseguró un piso del 88% de los haberes que percibe la Policía Federal para igual grado o jerarquía, porque -a su juicio- ningún dispositivo autorizaba “desengancharse”.----------

------ Intentan forzadamente y planteando cuestiones novedosas, que se interprete que el “enganche” a los salarios de la Policía Federal continúa vigente y que este precepto (art. 69) no derogó dicho art. 148, como se concluyó en la sentencia apelada. Exhiben su propio razonamiento acerca del alcance de este último, sin lograr rebatir el que el fallo desarrolla ampliamente.----------

------ Mencionan otras modificaciones que la Ley Nº 4124 en el año 1995 introdujo al régimen policial, sustituyendo los arts. 149, 150, 153, 155, 161 y critican que el fallo no lo analizara. Sin desarrollar este argumento, concluyen

que a su juicio no estaban derogados por el Decreto ley Nº 1700 “los arts. 148 y 151 del Decreto Ley Nº 1561/77”.----------

------ Finalmente, encuentran también que se equivoca el fallo impugnado cuando concluye en la derogación del sistema de cálculo del rubro zona desfavorable al dictarse la Ley Nº 5718. Dicen que no fue derogado ni expresa ni tácitamente, sino que ésta es “complementaria” del art. 151 primer párrafo in fine del Decreto Ley Nº 1561. ----------

------ En cuanto al Digesto Jurídico, mencionan que su texto definitivo se puso a consideración de la Honorable Legislatura Provincial por el plazo de un año, de las comisiones permanentes, también del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que no lo objetaron. Entonces así fue sancionado en enero de 2009, aprobado expresamente por el Poder Legislativo tal como se encuentra publicado. Refieren que “a la fecha, han pasado dos integraciones de las Cámaras legislativas”, solicitan considerar que por esto fue aprobado en dos oportunidades y por unanimidad “sin que ninguna propicie alguna modificación del texto vigente del Decreto Ley 1561 (ahora denominado XIX Nº 8) por considerarlo erróneo”. Encuentran que los votantes, en el fallo en crisis se han arrogado facultades exclusivas del Legislador al analizar históricamente normas para “terminar sin el debido fundamento, apartándose del texto aprobado vigente” que “omiten aplicar”.----------

------ Aluden a las técnicas empleadas en la elaboración del Digesto Jurídico, dicen que se ajustó éste a las mismas y mencionan las Leyes Nº 5199 y 5816. Insisten en que no han sido derogados los dos preceptos que pidieron aplicar en el objeto de la demanda.----------

------ A continuación, se dedican al planteo de inconstitucionalidad del art. 3° de la Ley N° 5415 que, en el año 2005, modificó el mecanismo de liquidación de los salarios policiales, fijando haberes básicos diferenciados para los dos escalafones y que fuera rechazado en la sentencia en crisis. Inteligen que esto fue así hasta el dictado del Decreto N° 1886/13 y la Ley I N° 512, que reestablecieron el mismo básico para idénticas jerarquías en ambos ///Agrupamientos. Arguyen que esta normativa reconoció la desigualdad existente y concordante con la presentación de los accionantes (fs. 347).--------

------ Controvierten el argumento del fallo en cuanto a que la prueba pericial no arrojó las referidas diferencias, alegando que de la simple observación o cotejo de la experticia resulta evidente la diferencia en los básicos a igual jerarquía, en detrimento de los correspondientes a Servicios respecto de los de Comando. Acusan que los sentenciantes tampoco evaluaron toda la prueba en conjunto. Porque -según afirman- la disparidad indicada surge también de las escalas salariales correspondientes a los años 2005 a 2012, que se agregaron en autos.-

------ Transcriben, del fallo en crisis, la mención hecha relativa al examen de conveniencia o acierto del criterio del Legislador y los límites del juez a la hora de analizar la política legislativa; para agraviarse de que los miembros de la Sala hayan acudido a estos conceptos, cuando -según interpretan- se habían arrogado la calidad de legisladores para sentenciar que lo que dice el Digesto Jurídico no está vigente (fs. 347 vta.). Reiteran que, tal como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Guida”, el Estado no puede

alterar la sustancia de la remuneración, y concluyen que ello ocurrió con la sanción del art. 3° de la Ley N° 5415.----------

------ Finalmente, a fs. 348, efectúan reserva de acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.----------

------ 3.- Corrido traslado del recurso interpuesto, respondió la Provincia del Chubut a fs. 351/364. ----------

------ Bajo el título “A-Ausencia del caso federal”, advierte que el recurso de los actores no resulta formalmente admisible, atento que no existe una cuestión federal que habilite al Alto Tribunal a atenderlo, porque no se configura el supuesto apartamiento del derecho vigente que aquellos le endilgan al fallo en crisis, ni una violación a “la garantía de la justa retribución (art. 14 bis CN)”. Por el contrario -asegura- la sentencia se fundó en la normativa en vigor cuando declaró derogados los artículos invocados en su reclamo de diferencias salariales *“y el respectivo yerro del Estado Provincial en su incorporación al Digesto”*.----------

------ Mediante citas de fallos del Máximo Tribunal señala que no existe una cuestión netamente constitucional, cuando alude a los arts. 14 bis, 17, 18, 33 y 75 incisos 19, 22 y 23 de la Carta Magna Nacional, sino una mera discrepancia de los recurrentes con lo resuelto por este Superior Tribunal de Justicia y que ello no basta para habilitar la instancia extraordinaria. Advierte que tampoco resulta habilitada si la decisión versa sobre la inteligencia que corresponde dar a normas o aspectos de hecho y prueba, propios de los jueces de la causa, cuando no media una carencia de fundamentación en lo resuelto. Alude a la excepcionalidad de los supuestos que la habilitarían, si las sentencias están ///desprovistas de todo apoyo legal y fundadas en la sola voluntad de los jueces, impidiendo considerarlas como actos jurisdiccionales. ----------

------ Señala que los recurrentes acompañaron la carátula pertinente, mas no indicaron la ubicación de la sentencia en el expediente, ni las fojas en que introdujeron la cuestión federal y su mantenimiento. Observa también que en el libelo recursivo aquéllos transcribieron partes del fallo en forma fragmentada, sin dar a conocer la existencia de párrafos anteriores, porque no se emplearon puntos suspensivos o corchetes para indicarlo.----------

------ Asegura que en los votos de la sentencia impugnada, dictada sin disidencia -los transcribe parcialmente-, exhiben que carece de fundamento el recurso de los actores cuando arguyen que no es una derivación razonada del derecho vigente.----------

------ Hace notar que en el único fundamento que tilda de “más o menos serio de la supuesta arbitrariedad” han brindado los recurrentes su propia interpretación de los arts. 68 y 69 del Decreto Ley Nº 1700/79. A la par advierte que en la inteligencia del primero -que tilda de “antojadiza”- nada expresan de la existencia de leyes posteriores, que año a año fueron fijando nuevas escalas salariales, en concordancia con lo prescripto por los arts. 1, 12, 14, 92, 135 y 155 de la Constitución Provincial. Asegura que por medio de esta interpretación de los recurrentes intentan introducir cuestiones novedosas y poco acertadas en este recurso, pretendiendo encontrar en su redacción una supuesta voluntad del legislador que no es tal, haciéndole decir lo que no dice.

Cuestiona que los recurrentes no hayan formulado antes del fallo el planteo y recién a partir de la sentencia impugnada argumentasen acerca de la técnica legislativa de aquel Decreto Provincial. ----------

------ Culmina criticando a los quejosos por entender que ni siquiera vincularon la decisión impugnada y el derecho de propiedad, solo hicieron una mera referencia a derechos constitucionales. Aduna jurisprudencia relativa a los recaudos de este Recurso Extraordinario cuando se invoca la causal de arbitrariedad.----------

------ **CONSIDERANDO:** ----------

------ I.- Que por imperio procesal compete a este Cuerpo efectuar el examen de admisibilidad de los Recursos Extraordinarios impetrados, de conformidad con las reglas que impone la jurisprudencia y las Acordadas N° 04/07 y 38/11 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.----------

------ La primera de ellas “...viene a establecer parámetros claros y definidos respecto a la forma en que deben articularse tanto el Recurso Extraordinario Federal como la presentación directa por denegación de aquél. Basándose en sus potestades reglamentarias y en la conveniencia de catalogar los requisitos de admisibilidad de estas vías impugnativas, el Alto Cuerpo detalla en diez artículos los recaudos formales que deberán cumplir a los fines de su admisibilidad.” (Conf.: Maximiliano CALDERÓN y Eduardo PERELLI - “La Acordada 4/2007. El principio de inadmisibilidad y sus excepciones”; publicado en LL Sup. Esp. Técnica Jurídica de los Recursos Extraordinarios y de queja - 2007 (abril), 27).----------

///--- Por su parte, la segunda dispone la utilización de papelería en formato de hoja A4 para todas las presentaciones que se realicen ante el Cimero Tribunal, a partir del 1° de Febrero del año 2012.----------

------ La Acordada N° 04/07 establece en su art. 11°, que cuando el apelante no haya satisfecho alguno de los recaudos para la interposición del Recurso Extraordinario Federal, o que lo haya hecho de modo deficiente, la Corte desestimará la apelación mediante la sola mención de la norma reglamentaria pertinente, previendo como excepción los casos en que “*según la sana discreción, el incumplimiento no constituya un obstáculo insalvable para la admisibilidad de la pretensión recursiva”*. Y manda a proceder de idéntico modo a los Jueces y Tribunales cuando denieguen la concesión del Recurso Extraordinario por no haber satisfecho los recaudos que esta reglamentación impone.----------

------ II. Desde este primer escalón de análisis, es del caso señalar, que la quejosa ha satisfecho esos requisitos de índole material, pues acompañó la carátula exigida, *consignando parcialmente los datos que la misma requiere*, omitiendo señalar la ubicación en el expediente de la sentencia recurrida y el número de foja donde se introdujo la cuestión federal. Por su parte, la pieza recursiva ha sido presentada en formato de hoja del tamaño requerido, con una extensión de cuarenta páginas, que contienen un máximo de veintiséis renglones. El tamaño de letra utilizado se ajusta al recomendado en la reglamentación.----------

------ Del mismo modo estimamos que los recurrentes han introducido su pretensión de manera *tempestiva*. Cabe poner de resalto que, conforme surge de la carátula acompañada (“Cuestiones planteadas”) y del acápite III, punto 7 “El gravamen real, concreto y actual ...”, el agravio invocado se circunscribe a las pretensiones derivadas de la aplicación de los arts. 147, segundo párrafo y 149, primer párrafo, in fine, de la Ley XIX N° 8. No obstante, del texto del escrito recursivo, surge también una crítica al rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley N° 5415 (fs. 347/348).----------

------ III. Que en avance la Sala abordará la admisibilidad del recurso desde las reglas contenidas en el art. 3° y sus incisos de la Acordada de que se trata, cuestión que se vincula -como es natural- con los presupuestos que habilitan la intervención de la Corte bajo las previsiones del art. 14 de la Ley N° 48.--------

------ III. a. En lo que atañe a la primera regla del art. 3°, no hay polémica posible en considerar que esta Sala del Superior Tribunal de Justicia de la provincia agota la instancia provincial y cuadra al término último tribunal de la causa que el remedio federal exige para habilitar la vía de acceso ante la Corte Suprema. También se trata la cuestión de una sentencia definitiva que ha puesto fin a un proceso controversial cuya descripción se ha formulado en los párrafos de inicio.----------

///--- III.b. Sin exagerar rigorismos, cabe expresar que los recurrentes introdujeron la cuestión federal en el apartado XI del libelo inicial (fs. 52 vta.). Y, como advierte la contraria, con posterioridad omitieron mantenerla en los distintos estadios procesales en los que intervinieron. Se hace notar el desacierto de la descripción contenida en la última foja mencionada, pues ha mentado “…el hipotético supuesto en que no se acoja el planteo de inconstitucionalidad…” para anunciar que tal conculcaría los derechos a una retribución justa, a la igualdad y a la propiedad, amparados por los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional.----------

------ III.c. En apretada síntesis cabe apuntar que el fallo de esta Sala le es adverso a los actores, atento que rechazó sus pretensiones de percibir diferencias salariales sustentadas en dos preceptos que aparecieron publicados en el Digesto Jurídico; a más de denegar la inconstitucionalidad planteada contra el art. 3 de la Ley N° 5415 que modificó el sistema de liquidación de los haberes básicos que, originariamente, contemplaba el art. 149 del régimen policial para sus dependientes. Esencialmente los fundamentos dados son los siguientes: ----------

------ Se interpretó que los actores estaban convencidos del incumplimiento de dos artículos que establecían mecanismos de liquidación de haberes y que de aplicarse, producirían además su incremento hacia el futuro. Sustentaban en su inaplicación en la liquidación de sus haberes la conducta ilícita de su empleadora Provincia del Chubut. Consideraban incumplidos el art. 148, segundo párrafo y el art. 151, primer párrafo, in fine del Decreto Ley Nº 1561. Respectivamente reproducidos sus textos al publicarse en el Digesto Jurídico en enero de 2009, ahora como artículos 147, segundo párrafo y 149, primer párrafo, in fine de la Ley XIX Nº 8.----------

------ En esta última ley mencionada, debía reordenarse el régimen policial que contenía el Decreto Provincial Nº 1561 y sus modificaciones. Se entendió,

luego de un examen histórico del régimen, que ambos preceptos, que constituían parcialmente el fundamento jurídico de esta acción contencioso administrativa, se encontraban derogados, pese a que erróneamente figuran en el Digesto.----------

------ Interpretaron los tres votantes, que el sistema de porcentualidad o “de enganche” con los haberes de la Policía Federal fue derogado expresamente cuando así se lo hizo con el primero de los artículos citados, al dictarse el Decreto Ley Nº 1700.----------

------ Luego coincidieron, respecto del segundo precepto, que se configuraba un supuesto de derogación tácita, al que alguna doctrina y jurisprudencia aluden como “*derogación orgánica” o “institucional*”. Afirmaron que cuando los actores solicitaban tomar la letra del Decreto Ley Nº 1561 porque contenía un sistema de cálculo del adicional por zona mediante un porcentaje, no atendían que ya las autoridades provinciales habían decidido reemplazarlo con el dictado de la Ley Provincial Nº 5718. Que en esta ley y en posteriores normas, se estableció un mecanismo diferente para computar ese rubro (el método de suma fija) y se valoró que los actores admitían que habían percibido ese concepto.----------

/// Se consideró aplicables el principio *lex posterior derogat legi priori* y el *criterio de incompatibilidad de sistemas normativos.*----------

------ Se advirtió que a esos dos antiguos artículos se les había adjudicado un número nuevo para ordenarlos, pero en esencia son los mismos. Se resaltó que ésta era una cuestión relevante, que no puede ser soslayada para la solución del caso: “*no hay sanción legislativa de nuevas leyes, por ende no son “nuevos” esos dos preceptos*”. Entonces, para restablecer los dos sistemas derogados se requería la sanción de nuevas leyes.----------

------ Se analizó el efecto de la derogación de una ley y respecto a aquellos preceptos se concluyó que no se habían restablecido los antiguos sistemas de enganche con los haberes de la policía federal ni el porcentual por zona desfavorable sobre aquéllos, como los accionantes entendían al formular su pretensión. Se ahondó en ello: para que se “restablecieran” se requería la sanción de nuevas leyes que ordenaran aplicar esos dos sistemas salariales, pues estaban contenidos en artículos derogados, lo que no ocurrió con el advenimiento del Digesto Jurídico.----------

------ No aconteció esto último -se expuso- por cuanto quienes interpretaron y reordenaron el cuerpo de antiguas leyes, no podían arrogarse la función de sancionar nuevas normas, pues esto es de competencia exclusiva y excluyente del legislador. Se entendió cuál era el alcance de la Ley Provincial Nº 5199, que limitó las atribuciones de quienes elaboraron el Digesto Jurídico, en su art. 4, a las técnicas de recopilación, unificación y ordenación de normas provinciales -en ramas y números correlativos-, separándolas de otras cuando se interpretara que habían perdido vigencia.----------

------- En relación a la inconstitucionalidad se interpretó que, por la Ley N° 5415, el Estado Provincial tomó la decisión de abandonar el sistema de liquidación de sueldos de todos los policías provinciales vigente hasta ese momento, mediante una ley salarial que implicó un “aumento” para todos esos

dependientes, incrementando en montos diferentes los haberes básicos de las idénticas jerarquías de ambas agrupaciones, según fijaba en sus Anexos, denominándolo “sueldo básico”. Y, desarrollando la legislación respectiva, se falló que ésta no fue la única modificación que sufrió el régimen salarial. Por el contrario, con trascripción de los arts. 149, 153 y 154 de ese -el primer Votante- puntualizó los “vaivenes” que debió sortear la política salarial históricamente, lo que se plasmó en la Ley del Personal Policial. Concluyendo que la modificación de las leyes no da lugar a cuestión constitucional y que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos ni a la inalterabilidad de los mismos.----------

------- Sostuvo también que no estaban reunidos en autos los extremos necesarios para configurar la vulneración de la “garantía de igualdad” del art. 16 de la Constitución Nacional, ni lograron probar los actores que la misma haya sido lesionada en materia de remuneraciones.----------

/// Desestimada la confiscatoriedad, irrazonabilidad o arbitrariedad, dilucidaron los tres votantes, que la Sala no puede ponderar la conveniencia o acierto del legislador cuando, al amparo de sus atribuciones, decidió derogar el sistema del art. 149 a través del art. 3° de la Ley N° 5415; en la medida en que no se haya verificado -como en el caso- un desajuste con la manda constitucional de los arts. 16 y 14 bis.----------

------ III.d. Que debe tratarse a continuación el nudo de la cuestión que se plantea: si los recurrentes han hecho crítica fundada y sistemática del fallo que recurren, si esa crítica involucra cuestión federal y si ese tema fue tratado con suficiencia.----------

------ III.d.1. En principio, cabe recordar la inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica que si los agravios descriptos descuidan controvertir los fundamentos -concretos y determinantes- explícitos en la sentencia, y consecuentemente, omiten la crítica razonada que asegure la autosuficiencia del libelo, el Recurso Extraordinario no es admisible. La omisión de formular una crítica concreta y razonada de los argumentos que sustentan lo resuelto por el a quo es un defecto que, por sí mismo, basta para declarar la improcedencia del remedio federal intentado (Conf. CS, Fallos, 270:356; 278:121; 294:396; 295:99, entre muchísimos otros). Si el recurrente no refuta de manera contundente los fundamentos que dieron sustento a la decisión, el Recurso Extraordinario planteado deviene inadmisible (CS, Fallos: 296:639; 392; 283 y 334; 310:1465; 315:2986 y otros), atento que “el recurso carece de la suficiencia necesaria, pues no completa la crítica razonada que es exigible para ser admitido” (Fallos 302:418, 303:1366, 308:2263, 314:117, 840, 315:2896 y otros).----------

------ Entonces, “la idoneidad de toda expresión de agravios, implica que el recurrente refute las conclusiones de hecho y de derecho que sustentan la decisión del sentenciante a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha el pronunciamiento. Las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto, o las simples consideraciones subjetivas o disgregaciones inconducentes o carentes del debido sustento jurídico no satisfacen las exigencias de la carga de fundamentación autónoma” (Conf. Fallos 307:1735, 2462, 314:481, 1440, 1626).----------

------ Pues "No son aptos para abrir la instancia del art. 14 de Ley 48, los agravios que reiteran dogmáticamente los ya vertidos, sin plantear una crítica concreta de todos y cada uno de los argumentos dados para desecharlos" (CS Fallos 307: 1735,2462, 314:481, 1440, 1626).----------

------ Asimismo, cabe recordar que “las cuestiones de hecho, prueba y Derecho Público local, son ajenas como regla, y por naturaleza, a la instancia del art. 14 de la Ley 48” (Fallos 304:1443, 1826, 314:1336, JA 24 1974-116).----------

------ Aún cuando se invoque la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad -en la que fundan el recurso en examen-, adviértase que ésta es excepcional y cabe descartar dicha tacha cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto, limitándose a aquellas sentencias desprovistas de todo apoyo legal y fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, de modo ///que ello impida considerarlas como actos jurisdiccionales (Fallos 323:4028, 326:2156, 2555).----------

------ Cuando los razonamientos expuestos en el libelo recursivo constituyen, simplemente, la aserción de una solución jurídica distinta, y el desacuerdo con la solución dada por los jueces al pleito, se ha entendido que "La doctrina de la arbitrariedad no cubre la disconformidad del apelante con las conclusiones del a quo... sino que sólo atiende a la exigencia constitucional de que aquéllas sean fundadas y constituyan derivación del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa" (Fallos 302:836,1030, 303:772, 310:676, entre muchos otros).----------

------ III.d.2.- Que el esfuerzo recursivo, desafortunadamente, no ha refutado con eficacia los términos de la sentencia en crisis, lejos de demostrar la supuesta arbitrariedad del pronunciamiento, insisten con imponer su propia interpretación del plexo normativo que se analizó en el fallo en crisis. Incumplen así con el inciso d) del art. 3º de la Acordada Nº 4/2007 del Alto Tribunal. ----------

------ En efecto, los peticionantes se desentienden de los fundamentos enunciados en la sentencia que atacan, especialmente de los conceptos jurídicos de derogación expresa y tácita, además de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los aplica. No rebaten con suficiencia que el Digesto Jurídico no sancionó “nuevas” leyes, que solo reordenó las existentes en el plexo provincial, razón por la cual los dos preceptos en cuestión, se mantienen derogados.----------

------ La introducción de temas omitidos en la demanda, una estrategia, no los favorece. Como bien señala la contraria, presentan dos cuestiones novedosas. Las mismas nada aportan y como sus argumentos son disímiles se anulan entre sí. Habiendo prescindido en la demanda de todo análisis normativo, vienen recién después de dictado el fallo a dar su propia interpretación del Decreto Ley Nº 1700. Debieron avizorar que podría ser interpretado en la sentencia definitiva. Ahora cuestionan su validez, al requerir que no se aplique su art. 69 -el que no les favorece porque deroga expresamente el primer precepto aludido- y que sí se considere su art. 68. Forzando la letra de este último dicen que la política legislativa abarcaba el mantenimiento del sistema de enganche,

cuando nada hace presumir que se refiera a éste, que no se menciona en ese Decreto.----------

------- III.d.3. Que desdeñados aquellos argumentos como vía de acceso al recurso federal, cabe considerar el tilde de arbitrariedad como legitimación de la propuesta.----------

------- Si hay un sector del recurso extraordinario que plantea dificultades para su identificación es del de sentencia arbitraria.----------

///--- La doctrina de la arbitrariedad ha merecido numerosas opiniones de las que sólo se ha de destacar algunas. Al respecto, comentan Ymaz y Rey el alcance de esa doctrina y destacan que el Magistrado debe resolver sustentando la sentencia en *la ley vigente.* Reseñan que "*a la condición de órganos de aplicación del derecho vigente, va entrañablemente unida la legal de los jueces de fundar sus sentencias -documentando así que son derivación razonada del derecho vigente y no producto de su voluntad individual- y* que la exigencia de que ellos tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional (Fallos 236:27). Así la Corte Nacional ha llegado a establecer de modo firme que es condición de validez de los fallos judiciales que ellos sean *"conclusión razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa" (Fallos 238:550, 244:521 y 523:249 y 275, entre muchos)* (citas y comentarios en pág. 113/114 de la obra "El recurso extraordinario", de Esteban Ymaz y Ricardo E. Rey, Abeledo Perrot, 3ra. Edición actualizada, año 2000).----------

------ A lo expuesto, cabe agregar que, según lo anota Genaro Carrió, "La Corte tiene resuelto que lo atinente al carácter derogatorio de una ley común por otra del mismo carácter no constituye cuestión federal (250:2236; 253:329; 250:61; etcétera)" (El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, Abeledo-Perrot, año 1967, pág. 183). Y ha reiterado el Alto Tribunal que "No habilitan la vía del art. 14 de la ley 48 las objeciones dirigidas a cuestionar el alcance derogatorio de la ley 17.500, respecto de los arts. 984 y 1017 del Código de Comercio, ya que conducen al examen de temas de derecho común, propios de los jueces de la causa." (Fallos 310:485).----------

------- III.d.4. Que los recurrentes, se evoca, califican el fallo del modo visto por rechazar la vigencia de los dos artículos que figuran en el Digesto Jurídico y proporcionan fundamento parcial a la acción. En definitiva, reiteran los mismos argumentos que trajeron al demandar.----------

------ Insisten en que en esto está la interpretación errónea de la sentencia en crisis. Sin rebatir lo considerado en el fallo: que se mutó de sistema de liquidación salarial, en particular, derogando el régimen anterior del Decreto Ley Nº 1561, cuando el Decreto Ley Nº 1700 estableció un haber básico para cada jerarquía, conforme luce su Anexo XI, el que contiene una columna "Básico" (BO 30/5/79, pág. 23) y sobre éste se calcularon los suplementos. Pese a que reconocen que el perjuicio deviene de este último anexo del Decreto Ley Nº 1700, se oponen forzadamente a que se interprete que es el nuevo sistema que correspondía aplicar y ya no el sistema que derogó el art. 69.-------

------ Tampoco es aceptable el argumento de que en la sentencia controvertida no se analizó la Ley Nº 4124 del año 1995, que, según refieren, modificó el

Decreto Ley N° 1561. Por ello, deducen que el último de los mencionados se encontraba vigente. Cabe referir que la ley citada introdujo modificaciones parciales a determinados artículos del Decreto Ley N° 1561 que no habían sido derogados por el Decreto Ley N° 1700 (año 1979), por lo cual no merecía su estudio en el fallo impugnado. Así, en cuanto al art. 148 del Decreto Ley N° 1561, con este confuso argumento no rebate el fundamento dirimente del fallo respecto de la derogación de aquél por el Decreto Ley Nº 1700 -basado en una interpretación armónica de sus arts. 1, 47 y 69, y en el cambio de sistema de liquidación, plasmado en las planillas del anexo correspondiente. Y en referencia al art. 151 del Decreto Ley N° 1561 (adicional por zona ///desfavorable fijado en un porcentual), esta alegación se desentiende del marco temporal, pues el decisorio analizó que la derogación tácita se produjo muchos años después, con la Ley Nº 5718 (sistema de suma fija), régimen éste que los actores admitían que se les aplicó. Además, cabe aclarar que la numeración del art. 149 al que refiere la Ley N° 4124 no coincide con la posterior adoptada por el Digesto Jurídico. Es decir, no se trata de los mismos artículos 149.----------

------ El Tribunal en el fallo apelado ha verificado que ya no estaban vigentes esos dos métodos en el régimen policial. Analizando las sucesivas modificaciones que ha sufrido éste desde que se dictó el Decreto Ley Nº 1561, detectó que habían sido abandonados ambos sistemas de liquidación -los que los actores requerían aplicar para calcular sus salarios-, sencillamente porque fueron derogados los dos preceptos que los contenían. Los recurrentes no atienden que el fallo resuelve sobre la inteligencia de normas de Derecho Público Provincial cuando verifica el método implementado para pagar los sueldos de los empleados públicos provinciales -policías- y no constituye una materia que deba interpretar el Alto Tribunal de la Nación. La jurisprudencia constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha excluido la existencia de cuestión federal cuando se trata de interpretar normas y actos locales (Conf.: Fallos, 104:51; 114:42). ----------

------ Cuando los recurrentes atribuyen una supuesta interpretación errónea del régimen policial de la Provincia del Chubut, que endilgan a esta Sala del Superior Tribunal, no atienden que esto no constituye materia de agravio idóneo para la vía intentada, aún cuando se funde en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. Prevenido su alcance en el punto III de estos Considerandos, cabe agregar que una sentencia puede ser tildada de “arbitraria” cuando carece de todo fundamento jurídico, pero no cuando está fundada en ley. El error en la interpretación de ésta… sea cual fuere su gravedad, no hace arbitraria a una sentencia en el sentido propio y estricto de la expresión -que es el que debe presidir el discernimiento de la procedencia del recurso extraordinario en estos casos- porque la existencia de él es por sí sola demostrativa de que el pronunciamiento *no se ha desentendido de la ley… sino que se ha hecho según una interpretación equivocada (de ésta) tomando por verdadera la que no lo es… es decir, que no es un acto de arbitrariedad o capricho del juzgador (Fallos 205:648).*----------

------ Respecto a la mentada inconstitucionalidad, los quejosos no rebaten con suficiencia que se trata de una cuestión de política salarial exenta del control de constitucionalidad, en tanto la misma sea ejercida dentro del marco de la razonabilidad y de la legalidad.----------

///

------ El Tribunal, en el fallo apelado, ha verificado que el régimen del personal policial -Dto. Ley N° 1561- no trata como iguales a los agrupamientos que conforman la Fuerza, esto es: Comando y Servicio. En el desarrollo del análisis de la norma modificada -art. 149- se realizó una reseña de las sucesivas ///reformas que sufrió dicho precepto y se advirtió que evidenciaba distintos vaivenes de política salarial, diseñada al amparo de las diversas tareas encomendadas, la responsabilidad asignada y los recaudos que para el ingreso a uno y otro establece. A partir de tales justificaciones, se concluyó que no estaba configurada la "identidad de situaciones" propia del principio invocado por los accionantes.----------

------ Sumado a ello, dígase que es impertinente el fundamento de los quejosos cuando achacan al Tribunal haberse apartado de los elementos probatorios producidos en autos. La labor del experto contable nada aporta en ese sentido en relación a la desigualdad entre los haberes básicos de los Agrupamientos del personal policial. Pues su auxilio fue requerido -a tenor de los Puntos de Pericia propuestos por los ahora recurrentes (fs. 99/100)-, en líneas generales, para dilucidar si en la liquidación de sus haberes se había respetado la proporcionalidad reclamada, correspondiente al *"enganche"* con los sueldos de la Policía Federal y la porcentualidad del rubro zona desfavorable. Tampoco aportan convicción las escalas salariales enumeradas, cuando en realidad el hilo conductor de los fundamentos de la sentencia en crisis, relativos a la distinción de los básicos para cada Escalafón, estuvo dado por las diferentes tareas que cada uno cumple. Argumentos estos que no fueron rebatidos por los quejosos. ----------

------ Es dable subrayar, además, que fueron condenados en costas conjuntamente porque -en la demanda- omitieron fatalmente detallar que este planteo de inconstitucionalidad debía limitarse únicamente al personal policial del agrupamiento Servicios y que, en el caso, se circunscribe a tres de los accionantes, pues quienes revisten en el escalafón Comando carecen de agravio.----------

------ III.d.5. En definitiva, resulta infructuoso su intento de "encorsetar" la cuestión constitucional en los arts. 14 bis, 16 y 17 cuando en la demanda nada argumentaron al respecto, limitándose a solicitar la aplicación de dos preceptos del régimen de la Policía del Chubut que la Sala entendió derogados, a más de la achacada inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley N° 5415. Invocan aquellas mandas constitucionales genéricamente, sin demostrar la "relación directa" entre alguna cuestión federal y la sentencia en crisis.----------

------ Por lo tanto, no satisface el requisito del art. 14 de la Ley N° 48 y la regulación de los puntos d) y e) de la Acordada Nº 4/07 de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que toca a la refutación argumental y a la relación directa de la alegación *"... con el fallo apelado para la procedencia de la apelación extraordinaria, y tal relación directa existe sólo cuando la solución de la causa requiere necesariamente de la interpretación del precepto constitucional aducido; por el contrario, cuando la cuestión federal propuesta es ajena a los puntos decididos en la sentencia, y obviamente ineficaz para modificarla, viene a faltar entre ambas el requisito apuntado"* (CSJN, en "Ministerio de Cultura y Educación - Estado Nacional s/art. 34 de la ley 24.521", del 06/05/2008, votos de los Dres. Enrique Santiango Petracchi, E. Raúl Zaffaroni y de la Dra. Carmen M. Argibay).----------

///

------ IV. Que por los motivos enunciados, como resultado de la valoración liminar que exige la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Sala estima ///que no están dadas las condiciones que habilitan el recurso intentado por los actores.----------

------ V. Que según las directivas que emanan de la Acordada N° 4/07 SCJN, cuando se desestima este tipo de Recursos, “las actuaciones ... se reputarán inoficiosas”, debiendo proceder del mismo modo los jueces o tribunales cuando denieguen su concesión (Punto 11 - segundo párrafo). En tanto medió sustanciación, cabe imponer costas a los actores recurrentes (arts. 69 y 70 CPCC) y regular los honorarios de los letrados que representan a la demandada -Dr. David Enrique Figueroa-, en el valor de 8 jus a la fecha de este pronunciamiento (arts. 1, 3 y 32 de la Ley XIII N° 4, modif. por Ley XIII N° 15), con más IVA si correspondiere.----------

------ Por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia; ----------

---------- **R E S U E L V E:** ----------

------ **1º) NO HACER LUGAR** al Recurso Extraordinario Federal interpuesto por los apoderados de los actores R. A. M., H. R. J. J. C. R., M. L. N., M. G. P., J. E. G., R. E. R. y J. H. R. F., a fs. 328/348 y vta. de estos autos, para ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.----------

------ **2°) COSTAS** a los actores recurrentes (arts. 69 y 70 CPCC).----------

------ **3°) REGULAR** los honorarios del Dr. D. E. F. en el valor de 8 jus a la fecha de este pronunciamiento (arts. 1, 3 y 32, conc. art. 7, último párrafo de la Ley XIII N° 4, modif. por Ley XIII N° 15). Con más IVA si correspondiere.----------

------ **4º) REGÍSTRESE** y notifíquese.----------

Fdo. Dres. José Luis Pasutti, Daniel Rebagliati Russell y Jorge Pfleger. Sentencia Interlocutoria recibida en Secretaría el 28/11/2014 y registrada bajo el N° 88/SCA/2014. CONSTE.----------